

Weyland, Kurt; Madrid, Raúl L.; y Hunter, Wendy.

*Leftist Governments in Latin America:
Successes and Shortcomings.*

Cambridge (Nueva York): Cambridge
University Press. 2010. 232 pp.

La izquierda significó un cambio en el que incurrieron los gobiernos de América Latina con el inicio del siglo XXI. Esto fue posible debido a la pérdida de legitimidad de los gobiernos neoliberales que fracasaron en su intento por cumplir las metas sociales establecidas con apego a las políticas del Consenso de Washington.

El discurso neoliberal que defendía el establecimiento de políticas favorables para un modelo de libre mercado hizo que los movimientos de izquierda fuesen vistos como aferrados a un fallido *status quo*.

El libro de Weyland, Madrid y Hunter busca, sin embargo, abordar el tema de hasta dónde han llegado los resultados de estos nuevos gobiernos, en vez de explicar qué hizo posible que alcanzaran el poder y que esta tendencia se extendiera como una ola de gobiernos afines en los países vecinos.

El término *izquierda* que se emplea a lo largo de este libro se define como el grado de participación del gobierno en inversiones, de control estatal sobre la economía, y la creación de instituciones públicas que amplíen sus servicios a la mayor parte de los ciudadanos como una manera de inclusión en el radio de acción del Estado.

“Primero: ¿Los gobiernos de izquierda han conseguido un crecimiento económico y mejorado su grado de desarrollo a pesar de los constreñimientos provenientes de la globalización económica y de los legados de las economías de mercado doméstico? Segundo: ¿Han distribuido los beneficios del crecimiento más equitativamente y mejorado el bienestar social de la población, especialmente en los sectores pobres y –si lo han

¹ Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, El Colegio de San Luis.

hecho— en un marco económica y políticamente sustentable? Y tercero: ¿Han promovido la inclusión política de los grupos marginados e incrementado la participación política en general, sin minar el pluralismo y las libertades básicas?” (Weyland 2010: 2).

Para responder a dichas preguntas, se analizan los casos más relevantes en la escena política contemporánea: Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. Se parte también de una clasificación dentro de la izquierda latinoamericana fundamental, en la que a Venezuela y Bolivia les corresponde la que en este libro se denomina izquierda contestataria, o radical para fines prácticos; mientras que Chile y Brasil se ubican dentro de la izquierda moderada.

Comenzando con el caso venezolano, se emplean dos cuestionamientos: “¿[...] qué tanto del pasado representa la administración de Chávez?” (Corrales, en Weyland 2010: 28), para referirse al grado de cambio político y económico que tiene este proclamado gobierno revolucionario; y, “segundo, ¿qué tan sustentables son las políticas económicas de Chávez?” (Corrales, en Weyland 2010: 28).

Contestando a la primera pregunta, Corrales valora como notable el cambio político en Venezuela con la llegada de Chávez al poder, pues de un sistema en el que se hacían presentes varias fuerzas opositoras se ha pasado a uno que les deja cada vez menos. Por un lado, esto ha sido posible debido a un retiro de la oposición de la competencia política en el sistema, como sucedió durante las elecciones de 2005; y, por otro, esto ocurre por una gran concentración del poder en la figura del ejecutivo mediante el deterioro del sistema de pesos y contrapesos, la reducción de la libertad de imprenta, y porque en 2008 se negó el reconocimiento de la autoridad a puestos obtenidos por la oposición. Este paso a un gobierno autoritario se ve a la vez reflejado en el incremento del poder militar venezolano. Los poderes presidenciales se han expandido rápidamente y se han quedado plasmados en la Constitución, como ocurrió en 1999; además, a dicha Constitución se le aplicaron reformas favorables para el ejecutivo en el referéndum de 2007.

El régimen chavista ha confiado gran parte de los puestos de gobierno a figuras militares, “casi una cuarta parte de las fuerzas pro Chávez en la Asamblea Constitucional de 1999 tenían un historial militar” (Corrales, en Weyland 2010: 33). La libertad de expresión posee también pocos espacios para los grupos críticos u opositores al régimen.

En cuanto a las políticas económicas, considerar que hubo una transformación no es algo palpable. El modelo económico actual no es muy diferente al anterior sistema de sustitución de importaciones, pues el país ha experimentado una dramática expansión del Estado en la economía a través de nacionalizaciones, expropiaciones, subsidios directos etc. Basta con ver que “el gasto público como parte del PIB se incrementó del 18 al 34% entre 1998 y 2008” (Corrales, en Weyland 2010: 39).

Sin embargo, no hay una fuerte restricción a las importaciones, pues es una manera en la que el gobierno puede combatir la inflación porque artículos extranjeros ayudan a que los precios se mantengan a la baja. Cabe también mencionar que el gobierno ha podido tener un amplio margen de maniobra debido a la renta petrolera; y, como un gobierno sin oposición, no necesita negociar la administración de la riqueza proveniente de las exportaciones petroleras con otros poderes, lo que hace que así se fortalezca un gobierno autoritario.

En cuanto al caso boliviano, el régimen de Evo Morales podría ser visto como un punto intermedio entre los moderados en Chile y Brasil y el radicalismo chavista, en parte porque se debe considerar la necesidad de que existan espacios para los muy variados actores políticos, y diferentes retos en materia económica.

Morales alcanzó la presidencia mediante una victoria aliada, es decir, fue una coalición la que consiguió desplazar a los partidos políticos tradicionales, pero ha requerido que la cúpula de poder negocie con estos otros partidos y grupos que mantienen un peso importante, lo que hace del pluralismo un elemento imprescindible. Destacan como puntos importantes que permanecen pendientes de negociar: la reforma agraria y las autonomías de las provincias donde los grupos indígenas representan la mayoría de la población.

El tema de las autonomías indígenas choca con prioridades políticas del gobierno. En 2006 algunas provincias llevaron a cabo, con autorización gubernamental, referéndums sobre obtener el estatuto de autonomía en todos sus niveles de gobierno; con un amplio apoyo del electorado, cada corte regional declaró su autonomía, decisión que no fue reconocida por la Corte Nacional porque incurría en una fuerte descentralización gubernamental. Los conflictos políticos se han mantenido desde entonces.

Desde el punto de vista económico, la nacionalización de los hidrocarburos y los recursos mineros permite un mayor control estatal en la economía, pero no consigue apartarse del modelo de exportador primario, es decir, en el Plan Nacional de Desarrollo encontramos en la exportación de hidrocarburos la piedra angular, pues ha permitido financiar un aumento del gasto público enfocado principalmente a infraestructura.

Molina menciona que una de las mayores oportunidades que tiene Bolivia es justamente la exportación de productos producidos con técnicas poco agresivas para la ecología, como son el cacao orgánico, la quinua, el café y la coca. Esto ya ha sido valorado por el régimen de Morales como una manera de diversificar la economía en fuentes de empleo sustentables y mejor pagadas.

De igual manera, Molina considera que el acceso a los beneficios de las exportaciones de hidrocarburos y la mejora de infraestructura han permitido ampliar programas escolares y de apoyo a adultos mayores a un mayor sector de la población, al mismo tiempo que reducen la dependencia de fuentes de ayuda internacionales –los cuales son logros notables–, pero augura serias dificultades provenientes de un sistema político polarizado y fragmentado.

La izquierda chilena ocupó el poder con Ricardo Lagos, en 2000, y prosiguió con Michelle Bachelet, en 2006, bajo circunstancias especiales. Chile había casi completado su transición a la democracia con el fin de la dictadura de Pinochet. Hasta antes de Lagos, las prioridades de la época de la transición eran de índole económica, y se logró una apertura muy exitosa del mercado chileno. Este factor, junto con el hecho de que los gobiernos se conformaban mediante coaliciones, obligaba a la izquierda a desarrollar un régimen moderado y conciliador.

Lagos comenzó el fortalecimiento de las instituciones mediante el desplazamiento de los militares de puestos administrativos y de grupos conservadores en el Senado. Las reformas de 2005 le dieron al presidente la facultad de remover de su cargo a jefes de las ramas de las fuerzas armadas y del Consejo de Seguridad Nacional. Estos ajustes a la Constitución permitían una institucionalización del poder y una profundización democrática.

Las metas económicas en el periodo presidencial de Lagos consistían en mantener una política fiscal conservadora, estabilidad macroeconómica,

generación de empleos y crecimiento económico. Se incurrió en una austeridad fiscal para emplear las reservas económicas en programas de pensión y en transferencias de capital al Banco Central, y se justificó dicha austeridad con los constreñimientos impuestos por los mercados internacionales más el argumento de que era crucial la estabilidad macroeconómica para proteger a los pobres e invertir en capital humano (Huber, en Weyland 2010: 82-83). El crecimiento económico alcanzado por ambos gobiernos es sobresaliente: entre un 3 y un 5% de 2003 a 2006; y el índice de pobreza se ha reducido a un ritmo de 39%, en 1990, a 19%, en 2003, y a 14%, en 2006 (Huber, en Weyland 2010: 86).

Las políticas sociales son un elemento clave para comprender y evaluar a la izquierda chilena. Uno de los ejemplos que mejor podemos emplear es el del sistema de salud pública; asimismo, podemos mencionar el cuidado de niños y la educación preescolar. Como herencia de la dictadura de Pinochet, los empleados “podían escoger entre mandar sus contribuciones al sistema de salud pública [...] o a una compañía privada de seguros de salud [...]” (Huber, en Weyland 2010: 88), y desde luego que la gran mayoría de la población estaba inscrita en el sistema público. La reforma propuesta por Bachelet consistió en la creación de una cobertura universal de salud para tratar enfermedades comunes al que tuvieran acceso contribuyentes tanto del sector público como del privado. La finalidad era que las clases más bajas pudiesen gozar de atención de salud aunque no fuesen contribuyentes del sistema, y al dejar fuera al sector de la economía informal de este beneficio se pretendía una mayor inserción de esta mano de obra en el sector de empleo formal (Huber, en Weyland 2010: 89).

Otra prioridad del gobierno de Bachelet fue ampliar la inserción de la mujer en la fuerza laboral; una de las formas en que lo ha conseguido es mediante el cuidado de niños y educación preescolar. En referencia al cuidado de madres que laboran, “las mujeres tienen derecho a 18 semanas de salario ausentándose del trabajo, seis antes y doce después del nacimiento de un hijo [...] la ausencia es pagada por el Estado” (Huber, en Weyland 2010: 93).

Chile ha conseguido completar su transición a la democracia y sus logros en cuanto a políticas sociales son interesantes pero también modestos. El régimen actual debe mantener esa flexibilidad al optar

por una economía guiada por los mercados internacionales, lo que no le permitirá tener un control notable sobre la economía, y le resta ceder ante ciertas demandas sociales.

La elección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, en 2002, significó una esperanza para la izquierda brasileña de romper los lazos por completo con el neoliberalismo, pero su administración se caracterizó por un pragmatismo que demostró ser una vía alterna a los constreñimientos del Consenso de Washington. De hecho, ha abrazado el modelo de economía de mercado y ha mantenido las tradicionales reglas clientelistas de la legislación brasileña (Kingstone, en Weyland 2010: 98).

De manera concreta, son tres puntos los que caracterizan este pragmatismo tanto del gobierno de Lula como de su antecesor Fernando Henrique Cardoso: “primero, y más importante, un constante compromiso con la estabilidad monetaria; segundo, un acercamiento relativamente flexible con el resto de la agenda de reforma de mercado; y finalmente, un compromiso con atender algunos de los asuntos fundamentales de pobreza y desigualdad” (Kingstone, en Weyland 2010: 99).

La competitividad de las exportaciones brasileñas se debió a una devaluación significativa de la moneda, pero mantenía la inflación muy elevada a cambio del crecimiento económico. El gobierno de Lula optó por elevar las tasas de interés de 16.24% en 2004 a 19.23% en 2005, acompañado de mayor apertura para capitales extranjeros, con lo que se alcanzó una apreciación de la tasa de cambio, que por otro lado podría traer malas consecuencias para el crecimiento económico a largo plazo. Esta medida, un tanto alejada de las características de un gobierno de izquierda, tiene el objetivo de evitar el desempleo (Kingstone, en Weyland 2010: 109).

En cuanto a políticas sociales, el crecimiento económico por sí solo es lo que ha permitido disminuir en gran medida los índices de pobreza del país, pero el gobierno brasileño ha hecho esfuerzos moderados en realidad por mejoras infraestructurales o de ampliación de servicios públicos. De hecho, una reforma del sistema de pensiones consistió en alargar la edad para el retiro de los empleados para que obtengan los beneficios completos, como una manera de solventar los gastos del gobierno en este asunto.

Es decir, la administración de Lula se ha enfocado en crear el ambiente más favorable desde el punto de vista macroeconómico para atraer

inversiones privadas y llevar a Brasil a un crecimiento económico sin precedentes en su historia, y así le ha permitido jugar un papel importante en la dinámica internacional, pero es discutible si dichas medidas sean sustentables a largo plazo, y si su comportamiento político pudiese causar decepciones de la izquierda (Kingstone, en Weyland 2010: 119).

Los gobiernos latinoamericanos, si bien enfrentan problemas similares como la pobreza, el desempleo y el retraso en el perfeccionamiento de su capital humano, han tenido distintas trayectorias históricas, lo que los ha llevado a optar por modelos sumamente variados entre sí. Aun dentro del contexto de la izquierda latinoamericana, vemos en este libro cuatro casos comparables pero muy diferentes, y que tienen la gran dificultad de garantizar el futuro a un mediano y a largo plazo aunque hayan alcanzado cierto grado de desarrollo y atraviesen por coyunturas favorables.